



Valledupar, quince (15) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Referencia: Proceso ejecutivo de menor cuantía.

Demandante: INSUFARMACOS DEL ORIENTE LTDA NIT: 900.055.881-3.

Demandado: FUNDACION MEDICO PREVENTIVA. Nit: 800.050.068-6.

Radicado: 200014003003 2018 00105 00.

#### I.ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a Dictar sentencia en el proceso EJECUTIVO, adelantado por la INSUFARMACOS DEL ORIENTE LTDA, a través de apoderado judicial, contra la FUNDACION MEDICO PREVENTIVA.

#### PRETENSIONES:

El demandante, a través de apoderado judicial solicitó a este Despacho Judicial se libre mandamiento ejecutivo a favor de INSUFARMACOS DEL ORIENTE LTDA y a cargo de la demandada teniendo como título base para la ejecución diferentes facturas de venta y por las siguientes cantidades:

1. Por la suma de \$2.927.139,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 38858.
2. Por la suma de \$1.117.683,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 38859.
3. Por la suma de \$4.026.601,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 38962.
4. Por la suma de \$2.618.893,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 38971.
5. Por la suma de \$1.452.527,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 39025.
6. Por la suma de \$143.625,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 39231.
7. Por la suma de \$982.849,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 39232.
8. Por la suma de \$5.934.340,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 39274.
9. Por la suma de \$317.567,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 39275.
10. Por la suma de \$2.233.485,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 39349.
11. Por la suma de \$2.367.411,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 39445.
12. Por la suma de \$1.844.984,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 39570.
13. Por la suma de \$2.362.587,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 40098.
14. Por la suma de \$4.537.155,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 40240.
15. Por la suma de \$283.140,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 40241.
16. Por la suma de \$2.019.711,00, por concepto de capital insoluto contenido en la factura N° 40340.
17. Por los intereses moratorios desde que se hicieron exigibles, hasta la cancelación de la deuda.



Las anteriores pretensiones, se fundamentaron en los siguientes

### HECHOS

Que, la FUNDACION MEDICO PREVENTIVA en calidad de deudora se obligó a pagar a la orden de INSUFARMACOS DEL ORIENTE LTDA la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/cte (\$35.169.697), como consecuencia de los elementos farmacéuticos adquiridos con la entidad demandante.

Que a la fecha de presentación de la demanda la señora FUNDACION MEDICO PREVENTIVA adeuda la totalidad de la obligación.

### ACTUACIÓN PROCESAL

El seis (6) de septiembre de 2018 se libró mandamiento de pago ordenando notificar a la demandada (fl 59).

Para el cinco (5) de noviembre de 2019 se notificó la parte ejecutada a través de su apoderado, quien contestó la demanda mediante memorial allegado al expediente el 19 de noviembre de 2019, proponiendo dentro de la misma las excepciones de: Buena Fe e Inembargabilidad de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud.

### DE LA EXCEPCION.

- EXCEPCIÓN BUENA FE, explica que su representada ha obrado con lealtad y transparencia ciñéndose estrictamente a lo establecido en el ordenamiento legal vigente, presta a responder en el término establecido todas las solicitudes que presenten sus afiliados o beneficiarios, rechazando o concediendo el derecho si se reúnen los requisitos legales.
- EXCEPCIÓN INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD como sustento de esta excepción cita el contenido del art. 63 de la carta Magna, art. 9 de la Ley 100 del 1993, el art. 19 del decreto 111 de 1996, art. 91 ley 715 de 2001, art. 25 Ley 1751 de 2015.

A su traslado la parte demandante omitió hacer pronunciamiento alguno sobre las excepciones planteadas por el demandado a través de su apoderado.

### PRUEBAS

Se tienen como pruebas las documentales aportadas por las partes con la demanda, la contestación y los escritos de excepciones las siguientes:

#### Del demandante.

- Facturas referidas en el mandamiento de pago.
- Poder para actuar
- Certificado de Existencia y Representación Legal



Del demandado.

- Relación de descuentos por Retención en la Fuente por IVA

CONSIDERACIONES

El artículo 4 de la Ley 270 de 1996 establece que la administración de justicia debe cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento, para lo cual se exige que sea eficiente y que los funcionarios y empleados judiciales sean diligentes en los asuntos a su cargo, sin comprometer la calidad de los fallos que deban proferir.

Es por ello que el despacho en aras de que prevalezca la celeridad y la economía procesal procede a dar aplicación al artículo 278 numeral 2 del CGP el cual establece que cuando no hubieren pruebas por practicar el Juez de oficio podrá dictar sentencia anticipada por escrito.

Ahora bien, valga decir, prima facie que, dentro del trámite no se observan irregularidades o vicios que pudieran producir nulidad total o parcial de lo actuado y que deban ser declaradas de oficio o puestas en conocimiento de las partes. Se garantizaron en todo momento, el debido proceso, la garantía del derecho de defensa, la contradicción de la prueba. Además, en la suscrita no concurre causal alguna de impedimento para fallar el fondo y no hay incidentes o cuestiones accesorias pendientes de resolver.

Los presupuestos procesales exigidos por la ley para la validez formal y existencia del proceso, como son la competencia, capacidad para ser parte, capacidad procesal, y demanda en legal forma, háyanse estructurados; por lo que el Juzgado no se detiene en su análisis, pues de faltar alguno de ellos sería procedente su estudio.

De conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso, la finalidad del proceso ejecutivo, por bien sabido se tiene, es la satisfacción al actor de una obligación que está a su favor y a cargo del demandado, obligación que ha de constar en documento que provenga del deudor y la cual debe ser clara, expresa y exigible.

En ese sentido, el despacho encuentra que con la demanda y como base del recaudo ejecutivo, se aportaron dieciséis (16) facturas de venta por insumos médicos despachados a la ejecutada, documentos que reúnen las exigencias referidas en el precitado artículo 422, que prestan mérito ejecutivo habida cuenta que registra la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la parte demandada y en favor de la ejecutante.

Así las cosas, el fundamento sobre el cual se ha construido la acción ejecutiva, ha sido el incumplimiento por parte de la demandada de pagar su obligación en la forma y términos acordados, por tanto, le compete a esta sede judicial entrar a analizar los supuestos fácticos y jurídicos con base en las probanzas existentes para emitir la decisión que corresponda.

Para contradecir las peticiones incoadas en el libelo introductorio, el apoderado de la parte demandada propuso como excepciones de mérito las que denominó "(i) Buena



*Fe, (ii) prescripción, (iii) Inembargabilidad de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud”.*

La excepción de **Buena Fe** la fundó en que su poderdante siempre ha obrado con lealtad y transparencia, ceñido con apego a los ordenamientos legales, en tanto que, de la de **Inembargabilidad de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud** se limitó a transcribir una pluralidad de normas sin establecer en concreto el argumento para contratacar las pretensiones del ejecutante resguardándose en dichas normas.

Pues bien, al analizar los alegatos del apoderado de la parte demandada, se pudo establecer que resultan improcedentes los medios denominados buena fe e Inembargabilidad de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, para desvirtuar las pretensiones, a saber, en cuanto a la Buena fe, se tiene que en ningún momento se le ha endilgado y menos probado mala fe, es por ellos que se le presume una actuación de la cual no se infiere la intención de causar un daño o engaño a la parte demandante, y si bien no ha pagado el dinero que se le cobra, ni ha argumentado haberlo pagado, de todos modos las deudas no necesariamente obedecen a una conducta maliciosa del deudor, por lo cual esta excepción es irrelevante para alterar la orden de pago generada.

En este punto, es importante resaltar la orfandad probatoria de la defensa, quien solo realizó una serie de manifestaciones que en nada restan merito a la ejecución aquí adelantada. En efecto, no se probó dentro del proceso que las facturas objetos de la presente ejecución fueran canceladas, que es la esencia del asunto.

Además de lo anterior, la afirmación realizada en torno a que los recursos del sistema de seguridad social en salud, son inembargables, hay que tener en cuenta que esa regla de inembargabilidad implica que bajo ninguna circunstancia los dineros de la salud podrán destinarse al pago de otros emolumentos que no se relacionen directamente con la garantía del derecho a la salud de las personas, afirmación que se encuentra en plena armonía con el artículo 25 de la ley 1751.

Al respecto, la Corte Constitucional, en distintos pronunciamientos, ha estimado que el principio de inembargabilidad de los bienes públicos es una garantía necesaria para salvaguardar el presupuesto del Estado, especialmente, los valores dirigidos a cubrir las necesidades esenciales de la población<sup>1</sup>. Asimismo, ha relevado que dicho principio tiene como finalidad asegurar la “(...) adecuada provisión, administración y manejo de los fondos necesarios para la protección de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado(...)”<sup>1</sup>

Lo anotado porque si se avalara el embargo de todos los activos públicos “(...) (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior(...)”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La línea jurisprudencial sobre el tema se encuentra en las sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008, C-539 de 2010. C-543 de 2013 y C-313 de 2014, entre otras.

<sup>2</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, reiterada en C-543 de 2013



La jurisprudencia de ese Alto Tribunal también ha sostenido que el anotado beneficio “(...) *no desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garantías al acceso a la administración de justicia ni de seguridad jurídica*(...)”, pues no es absoluto y es susceptible de excepciones. Sobre esto último, el legislador ha permitido la persecución de recursos públicos para el pago de sentencias proferidas contra la Nación, entre éstas, las derivadas de obligaciones laborales<sup>3</sup>.

No obstante, es la Corte Constitucional quien ha definido y desarrollado un régimen de excepciones al renombrado principio de inembargabilidad. Ciertamente, esa Corporación, para armonizar el postulado estudiado con “(...) la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo(...)”, en sentencia C-543 de 2013, prohibió la posibilidad de perseguir bienes inembargables con el propósito de lograr

“(i) [La] satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas<sup>4</sup>(...)”.

“(ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos<sup>5</sup>(...)”.

“(iii) [La extinción de] títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible<sup>6</sup>(...)”.

En esa providencia, se aludió, además, a una cuarta categoría así: “(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)<sup>7</sup>(...)” (subraya fuera de texto).

Si bien las excepciones reseñadas continúan establecidas sólo en la jurisprudencia, se observa que la Codificación Procesal Civil atendió a la existencia de éstas y las incluyó en el citado párrafo del canon 594<sup>8</sup>, precepto sobre el cual la Corte Constitucional indicó:

---

<sup>3</sup> Art. 21 del Decreto 028 de 2008

<sup>4</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992

<sup>5</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-354 de 1997. “Precisó que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada [artículo 19 del Decreto 111 de 1996] y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos(...)”.

<sup>6</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-103 de 1994 “(...) [S]e estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses(...)”

<sup>7</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002

<sup>8</sup> “Párrafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (...) Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario





*“No se desprende que exista una autorización para incumplir órdenes de embargo ni tampoco que arbitrariamente se autorice a que la entidad encargada de ejecutar la medida de embargo pueda congelar los recursos. Al contrario, en esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos públicos, sólo que, ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida entenderá que se revoca la misma si la autoridad que la decreta no explica el sustento del embargo sobre recursos inembargables. Pero si insiste, decretará el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, éstos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y serán puestos a disposición del Juzgado una vez cobreejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso así lo ordena (...)”<sup>9</sup>(subraya fuera de texto).*

Siendo lo anterior así, para el Juzgado es claro que la excepción de inembargabilidad no es aplicable cuando el título objeto de recaudo tiene su génesis en la prestación de servicios de salud, por ser esa la actividad para la que están destinados los recursos del Sistema General de Participaciones, tal como lo concibió la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 2013 al precisar que la limitación es inaplicable “respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a la cuales estaban destinados dichos recursos, a saber, educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Con todo, hay que destacar que la excepción de inembargabilidad de ellos recursos, tampoco ataca como tal la pretensión, sino una de las herramientas utilizadas por el ejecutante para obtener la materialización del pago, como lo son las medidas de embargo, pero, aunque todo lo dicho con anterioridad respecto de la excepción a dicho principio de inembargabilidad no fuera cierto, con todo, habría lugar a continuar la actuación procesal, pues la pretensión de pago que halla legítima, en la medida en que no fue controvertida por la demandada.

Por todo lo antes expuesto el despacho ordenará seguir adelante la ejecución en los términos fijados en el mandamiento ejecutivo, y que se practique la liquidación del crédito, no sin antes imponer costas a la demandada, tasando las agencias en derecho en un 7% de lo ordenado en el auto que libra mandamiento de pago.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, administrando justicia y en nombre de la república y por autoridad de la ley

#### RESUELVE:

**PRIMERO:** Declarar no probadas las excepciones de BUENA FE E INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN

---

no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar. (...) En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobreejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene”

<sup>9</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 2013



SALUD propuesta por la parte demandada, por las razones esgrimidas en la parte motiva del presente proveído.

**SEGUNDO:** Seguir adelante la ejecución contra de la demandada FUNDACION MEDICO PREVENTIVA, dentro del proceso Ejecutivo, adelantado por INSUFARMACOS DEL ORIENTE LTDA.

**TERCERO:** Téngase como obligación a cumplir la determinada en el mandamiento de pago.

**CUARTO:** Practíquese la Liquidación del Crédito de acuerdo con lo previsto en el Art. 446 del C.G.P.-

**QUINTO:** Decretar el avalúo y remate de los bienes embargados en este proceso.

**SEXTO:** Condenar en costas a la parte demandada. Liquídense por Secretaría. Ténganse como agencias en derecho a favor de la parte demandante, la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ML (\$ 5.645.580,00).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

**Firmado Por:**

**Clauris Amalia Moron Bermudez**

**Juez Municipal**

**División De Sistemas De Ingenieria**

**Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**1e63261a1a42f49c87cad2496b69a3ac31253cb33b854c7b66c491fac0d483d**

Documento generado en 15/06/2021 09:43:38 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**